

Bases Jurídicas y Políticas Reducidas a Cenizas

Derrota de AL en Panamá

- ★ No Vale ya Ante EU el Principio de no Intervención
- ★ Con Cuba, Nicaragua o el FMLN no Sería lo Mismo
- ★ La Elite Mexicana Debe Reflexionar Sobre la Lección

LORENZO MEYER

El juicio sobre un hecho político depende mucho del color del cristal con que se le mire. Desde la perspectiva de la presidencia norteamericana, la invasión a Panamá es un éxito rotundo: a un precio muy bajo, Estados Unidos saldó cuentas con un minúsculo dictador que le había humillado por varios años; ahora 80% de la opinión pública de Estados Unidos apoya la acción del Presidente Bush, cuya imagen de hombre indeciso se ha borrado (al menos por el momento), y el invasor es incluso aplaudido por una parte de la clase media y alta del país invadido. Sin embargo, ese mismo hecho visto desde la perspectiva del interés de largo

la crisis abierta y final de la no intervención acaba de tener lugar ahora en Panamá, con una acción militar y unilateral norteamericana contra un país latinoamericano y destinada a modificar la naturaleza del gobierno del país invadido en función de los intereses del invasor, intereses cubiertos con el supuesto manto de la justicia (llevar ante los jueces a un narcotraficante), la razón (defender la vida de los norteamericanos y la seguridad del canal de Panamá) y el altruismo (hacer triunfar a la democracia sobre el autoritarismo).

Desde tiempos inmemoriales se sabe que los gobiernos, en particular los de las grandes potencias, no actúan en política internacional con base en principios sino en intereses. Así pues, una vez consumada la derrota de los países del Eje y enfascado en su lucha mundial contra el comunismo, en el interés nacional de los Estados Unidos ya no estaba limitar su capacidad de acción en América Latina con la observación del principio de la no intervención, pues a cambio de esa limitación América Latina no le daba algo más que realmente le importase y que no pudiera conseguir de otra manera.

Con la invasión a Panamá en diciembre pasado, América Latina ha visto confirmado un temor que tenía desde fines de los años cuarenta: que el principio de no intervención no le ofrece ya protección alguna frente a Estados Unidos. Hoy está claro que las reglas que gobiernan la relación entre el tiburón norteamericano y las sardinas tropicales del sur del Río Bravo son, de hecho, las reglas anteriores a 1936. Son aquellas propias del estado de naturaleza, donde el pez grande se come al chico, cuando nuede y le conviene.

Con la inoperancia del principio de la no intervención, la única defensa realista y efectiva que les queda a los países de América Latina en contra de una repetición de lo sucedido en Panamá es convencer a los dirigentes norteamericanos de que el costo político que tendrían que pagar por una nueva invasión es lo suficientemente alto como para que resulte irracional.

Y es justamente en este último punto donde está para nosotros la lección de Panamá. Después de la guerra contra México el siglo pasado, —guerra de conquista de territorios contiguos y semivacios—

Estados Unidos sólo ha atacado en este continente a países muy pequeños, con sistemas políticos endeblados y en crisis, con una élite dividida, incapaz y donde el grupo en el poder tiene un déficit de legitimidad evidente. Además, los atacados siempre han tenido una inferioridad militar inmensa, lo que de antemano asegura a Washington una victoria rápida, contundente, espectacular y con bajas mínimas. Las muertes y destrucción causadas en el país objeto de la intervención son, desde la perspectiva del interventor, irrelevantes.

En vista de lo anterior, queda claro que entre más grande sea el país latinoamericano menor la posibilidad de ser invadido. En segundo lugar, está el tema de la naturaleza del sistema político; un sistema y un gobierno con grandes reservas de legitimidad y con arraigo social puede afrontar a un Estados Unidos agresivo con la posibilidad de una resistencia verdadero (no como la de Granada o Panamá) y de larga duración. En estas circunstancias, el recuerdo de Vietnam, aunado al rechazo popular de la población invadida y a pérdidas de las tropas de ocupación si no espectaculares al menos constantes, quitaría en Estados Unidos el apoyo público masivo que tuvo la invasión a Panamá. Es quizá por esto último que Estados Unidos ha decidido no resolver sus diferencias con la guerrilla salvadoreña, y menos aún con los gobiernos de Nicaragua y Cuba, por medio de la acción directa.

En tercer lugar, es indispensable que al estallar un conflicto agudo con Estados Unidos, las élites gobernantes latinoamericanas estén a la altura de las circunstancias y no permitan a Estados Unidos —como si lo hiciera Noriega y sus desafortunados socios militares— envolverse en el manto de la moral mientras con su gran poder de fuego de sus cuerpos mixtos móviles —la especialidad actual del Pentágono— reducen a cenizas tanto objetivos militares como barriadas civiles. En efecto, en la medida en que quienes pretenden asumir el liderazgo antimperialista y nacionalista sean personajes como Noriega —individuos públicamente conocidos como asesinos, corruptos y autoritarios— lo único que se logrará es hacer que suenen auténticas algunas de las razones con

que Estados Unidos ha justificado sus acciones imperialistas en América Latina: protección de la vida y de las legítimas propiedades estadounidenses, defensa de la democracia, restauración de los derechos humanos, y más recientemente, combate a la corrupción producto del narcotráfico.

En vista de todo lo anterior, resulta que la preservación del estado de derecho en América Latina es, en realidad, una de las mejores manifestaciones de patriotismo de las élites gobernantes y un arma antimperialista muy efectiva. Contra un régimen legítimo es difícil, aunque no imposible, montar una campaña de desprestigio internacional que hoy es un requisito para que el Congreso y la opinión pública estadounidense den su apoyo al uso de la fuerza contra un gobierno latinoamericano.

En conclusión, el principio de no intervención ca-

rece ya de efectividad, pero su esencia puede ser defendida por los latinoamericanos preparándose e políticamente para elevar el costo de una posible acción militar estadounidense en su territorio al punto de hacer perder a la invasión su atractivo.

Dada la historia y cercanía de México a la potencia interventora, la élite política mexicana —con un claro déficit de legitimidad

desde hace algún tiempo— haría bien en reflexionar sobre la lección profunda de lo que está ocurriendo en Panamá —y en Colombia— y darle a su tan llevado y traído "nacionalismo revolucionario" una base política real, pues esa es la única forma de que el tiburón en Washington tome en serio el compromiso mexicano con el famoso principio de la no intervención.